

## Ir hasta el final

JOSEP RAMONEDA

Zapatero explicó el pasado domingo en este periódico qué quiere decir que está dispuesto "a ir hasta el final" en el País Vasco: "No regatear ningún esfuerzo de todo el abanico que permite el Estado de derecho y la política para el fin de la violencia".

Lo que el Estado de derecho permite está bastante claro: la acción policial y judicial contra los terroristas y su entorno que tan eficaz ha sido para debilitar a ETA; y determinadas medidas de gracia y reinserción cuando los terroristas abandonen las armas.

Lo que permite la política es más impreciso. Sabemos que Zapatero está comprometido por el pacto antiterrorista a no pagar precio político por la paz. Lo cual marca un límite nada irrelevante a su acción, más teniendo en cuenta la enorme eficacia que ha tenido este principio, solemnizado como compromiso por parte del PP y PSOE, para que ETA se encontrara en un callejón sin salida. La política tendrá que hacerse en relación con los demás partidos. Pero no parece que estén en la misma sintonía que Zapatero. Cuando Ibarretxe hace caso omiso de su retroceso electoral y del rechazo del plan que lleva su nombre en las Cortes e insiste en mantenerlo caben dudas fundadas de que esté por la labor. Y cuando el PP manda a todos sus tenores políticos y mediáticos contra Zapatero por no instar la ilegalización de EHAK, no se puede evitar la impresión de que la derecha ha sentido el vértigo del fin de ETA, como ya ocurrió en otros momentos en el pasado. Es triste que el PP lance una estrategia que para que resulte ganadora —es decir, para que los nueve escaños de EHAK caigan como una losa sobre Zapatero— necesita que ETA vuelva a atentar.

Para ir hasta el final, Zapatero necesita la complicidad de las fuerzas democráticas. De momento no la tiene. Quizás, porque no tienen la misma idea de qué significa ir hasta el final. El PP quiere quedarse más corto. Habiendo conseguido colocar a ETA en un estado de considerable inoperancia, la tentación conservadora es que todo siga como está. Con la idea de que si esta situación de semiderrota es sostenible, el Estado se ahorra las concesiones graciosas que pudieran derivarse de un fin definitivo de la violencia y las consecuencias de un cambio de paradigma. Por el otro lado, el PNV, en tanto que Imaz no gane la batalla interna, parece seguir en la vía de convertir el *plan Ibarretxe* en un proceso irreversible hacia la separación. Si los populares temen que el final de la violencia signifique el principio de la independencia de Euskadi, los nacionalistas vascos recelan de que la paz pudiera parecer un punto de llegada y, por tanto, frenar el proceso soberanista. Con lo cual, Zapatero se puede encontrar en que sea el único interesado en acelerar las cosas. Su principal problema es que no es fácil encontrar un camino en que los dos, PP y PNV, entiendan que salen ganando.

El fin de la violencia en Euskadi sacudiría el actual estado de las cosas. Los partidos han crecido dentro de un orden determinado —que, en buena parte les configura— y son bastante rígidos en sus movimientos: las situaciones nuevas les dan vértigo, porque preparados para trabajar el día a día, los cambios de paradigma exigen esfuerzos que en primera instancia les sobrepasan. Que el Partido Popular utilice la lucha antiterrorista para desgastar a Zapatero no sólo es una violación del pacto, sino una manera de anteponer los intereses de partido —herido después de una dura derrota electoral— a los intereses generales. Y que el PNV no se haya puesto a trabajar ya con el PSOE para empezar a preparar el futuro en Euskadi demuestra que no sólo los intereses de partido sino incluso los conflictos internos

están a menudo por encima de lo que aparentemente deberían ser objetivos principales y comunes. Pero la política es así. Para justificarlo, algunos se apoyan en la equívoca distinción weberiana entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad. Me permito recordarles la advertencia de Karl Jaspers: "La ética de la responsabilidad incluye la convicción de tener que responder de las propias acciones".

**El País, 28 de abril de 2005**